JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: JIN-272/2025 Y
ACUMULADOS¹

PARTE ACTORA: **DATO PERSONAL
PROTEGIDO**²

**PARTES TERCERAS
INTERESADAS:** NYRIA JANETTE
TREVIZO RIVERA, DEBBIE LEÓN
CHACÓN, CRISTINA GUADALUPE
SANDOVAL HOLGUÍN, GLORIA
ANGÉLICA MENDOZA BELTRÁN,
MARCELA HERRERA SANDOVAL,
PERLA GUADALUPE RUIZ
GONZÁLEZ, ROBERTO ANDRÉS
FUENTES RASCÓN, ADALBERTO
VENCES BACA, GERARDO JAVIER
ACOSTA BARRERA Y JOSÉ LUIS
CHACÓN RODRÍGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE
CHIHUAHUA

MAGISTRADO PONENTE: HUGO
MOLINA MARTÍNEZ

SECRETARIO: SAMUEL ADRIÁN
GÓMEZ PÉREZ

Chihuahua, Chihuahua, a dos de julio de dos mil veinticinco.³

Sentencia definitiva por la cual el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua:

- a) Determina el **desechamiento** de las demandas de Juicio de Inconformidad presentadas por **DATO PERSONAL PROTEGIDO**, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia

¹ Relativos a los expedientes identificados con las claves JIN-275/2025, JIN-284/2025, JIN-286/2025 y JIN-294/2025, del índice de este Tribunal.

² Dato personal protegido de conformidad con los artículos 6 y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracciones IX y X; 31 y 80 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículos 100; 106 fracciones II y III; 107; 110; 111; 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 109; 117 fracciones II y III; 120; 121; y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

³ Todas las fechas en el presente proveído corresponden al año de dos mil veinticinco.

prevista en el artículo 107, fracción IV de la Ley Electoral Reglamentaria de los artículos 99, 100, 101, 102 y 103 de la Constitución para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua⁴.

b) Ordena dar vista al Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Chihuahua, por las consideraciones señaladas en el **apartado 7** de esta sentencia.

c) Ordena dar vista a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para que actúe conforme al **apartado 8** de la presente determinación.

GLOSARIO	
Consejo Estatal	Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.
H. Congreso del Estado	Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
Instituto	Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
JIN	Juicio de Inconformidad.
Ley Electoral	Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
Ley Reglamentaria	Ley Electoral Reglamentaria de los artículos 99, 100, 101, 102 y 103 de la Constitución para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua.
Parte actora	DATO PERSONAL PROTEGIDO
Poder Judicial	Poder Judicial del Estado de Chihuahua
Proceso Electoral Judicial	Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025.
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Partes terceras interesadas	Nyria Janette Trevizo Rivera, Debbie León Chacón, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín, Gloria Angélica Mendoza Beltrán, Marcela Herrera Sandoval, Perla Guadalupe Ruiz González, Roberto Andrés Fuentes Rascón, Adalberto Vences Baca, Gerardo Javier Acosta Barrera y José Luis Chacón Rodríguez.
Tribunal	Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua.
TSJ	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

⁴ En adelante, *Ley Reglamentaria*.

1. ANTECEDENTES

1.1 Reforma del Poder Judicial de la Federación. El quince de septiembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de *“reforma del Poder Judicial”*.

1.2 Decreto de Reforma para la Elección de Personas Juzgadoras. El veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Local. Entra otras cosas, estableció el proceso de elección por voto popular de las personas juzgadoras en el Estado.

1.3 Inicio del Proceso Electoral Judicial. El veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro, el Consejo Estatal aprobó el acuerdo por el que emite la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Judicial, para la elección de Magistraturas del TSJ y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como las personas juzgadoras de primera instancia y menores del Poder Judicial.

1.4 Jornada electoral. El primero de junio se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de los cargos referidos en el numeral anterior.

1.5 Cómputos. Del primero al dieciocho de junio se llevaron a cabo las sesiones especiales de cómputo por parte de las catorce Asambleas Distritales del Instituto.

1.6 Declaración de validez y entrega de las constancias de mayoría. El catorce de junio, el Consejo Estatal mediante acuerdo IEE/CE153/2025, declaró la validez de la elección de Magistraturas del TSJ y del Tribunal de Disciplina Judicial.

1.7 Presentación del JIN. El dieciocho de junio, la parte actora presentó ante este Tribunal cinco medios de impugnación en contra de la validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría en favor de diversas personas candidatas a magistraturas del TSJ.

1.8 Partes terceras interesadas. Durante el plazo otorgado para tal efecto, comparecieron las siguientes personas en su carácter de terceras interesadas:

El veintidós de junio:

- **Nyria Janette Trevizo Rivera**, en su carácter de candidata a magistrada en materia civil.
- **Debbie León Chacón**, en su carácter de candidata a magistrada en materia civil.
- **Cristina Guadalupe Sandoval Holguín**, en su carácter de candidata a magistrada en materia civil.
- **Gloria Angélica Mendoza Beltrán**, en su carácter de candidata a magistrada en materia civil.

El veintitrés de junio:

- **Marcela Herrera Sandoval**, en su carácter de candidata a magistrada en materia familiar.
- **Perla Guadalupe Ruiz González**, en su carácter de candidata a magistrada en materia penal.
- **Roberto Andrés Fuentes Rascón**, en su carácter de candidato a magistrado en materia civil.
- **Adalberto Vences Baca**, en su carácter de candidato a magistrado en materia penal.
- **Gerardo Javier Acosta Barrera**, en su carácter de candidato a magistrado en materia penal.
- **José Luis Chacón Rodríguez**, en su carácter de candidato a magistrado en materia penal.

1.9 Formación de expedientes, registro y turno. En fechas veintiséis y veintisiete de junio, se ordenó formar y registrar los expedientes con las claves **JIN-272/2025**, **JIN-275/2025**, **JIN-284/2025**, **JIN-286/2025** y **JIN-**

294/2025, y se asumieron por parte de la ponencia a cargo del Magistrado Hugo Molina Martínez, para su sustanciación y resolución.⁵

1.10 Circulación del proyecto y convocatoria. El uno de julio, se ordenó a la Secretaría General circular el proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública del Pleno para su discusión y resolución.

2. COMPETENCIA

Este Tribunal es competente para conocer y resolver los medios de impugnación, por tratarse de JIN promovidos por una ciudadana en contra de la declaración de validez y la entrega de la Constancia de Mayoría y Validez de la elección de Magistraturas del TSJ, en el marco del Proceso Electoral Judicial.

Lo anterior, conforme a lo previsto en los artículos 37, primer y cuarto párrafo y 101 de la Constitución Local; en correlación con los Transitorios Primero y Segundo del Decreto LXVIII/RFCNT/0172/2024; así como 83, numeral II, 84, 88 y 89 de la Ley Reglamentaria.

3. ACUMULACIÓN

Atendiendo a que de los medios de impugnación referidos en el apartado de antecedentes de la presente determinación, se desprende la conexidad en la pretensión de la parte actora, se ordena la acumulación de los expedientes identificados con las claves **JIN-275/2025**, **JIN-284/2025**, **JIN-286/2025** y **JIN-294/2025**, al **JIN-272/2025**, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley Reglamentaria.

4. CUESTIÓN PREVIA

Tal y como se señaló en el apartado 1.8 del capítulo de antecedentes de la presente sentencia, así como se advierte del informe circunstanciado

⁵ Visible en foja 264 del expediente JIN-272/2025, en foja 175 del expediente JIN-275/2025, en foja 065 del expediente JIN-284/2025, en foja 078 del expediente JIN-286/2025 y en foja 083 del expediente JIN-294/2025.

emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, comparecieron diversas personas en su carácter de terceras interesadas, quienes en sus escritos señalaron medularmente, lo siguiente:

4.1. Nyria Janette Trevizo Rivera. En su carácter de candidata a magistrada en materia civil del TSJ, señaló que en el medio de impugnación presentado por la promovente, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 107 fracciones IV, V y VIII de la Ley Reglamentaria, toda vez que:

- Manifiesta que la promovente carece de interés jurídico y de legitimación, pues a su dicho, no se vio afectada de forma directa con el acto reclamado, en virtud de no haber participado como candidata en el Proceso Electoral Judicial.
- Señala que los hechos impugnados por la promovente se tratan de actos consumados, toda vez que la declaración de validez es el acto en contra del cual se debió basar su reclamación, y no contra la constancia de mayoría, la cual certifica el triunfo por la mayoría de votos obtenidos y, en ese sentido, al no haber sido impugnada la declaración de validez, quedó consentida de forma irreparable.

4.2. Debbie León Chacón. En su carácter de candidata a magistrada en materia civil del TSJ, señaló que en el medio de impugnación presentado por la promovente, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 107 fracciones III, IV y V de la Ley Reglamentaria, toda vez que:

- Menciona que no se deducen hechos ni agravios de los que se deduzcan circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre presuntas irregularidades, sino que se trata de una serie de afirmaciones vagas e imprecisas, de las que no se deducen hechos ni tampoco agravios en contra de la elección de personas juzgadoras del TSJ.

- Señala que, al no haberse acreditado una afectación a los derechos de la promovente, no hay razón alguna que justificara la procedencia del medio de impugnación.

4.3. Cristina Guadalupe Sandoval Holguín. En su carácter de candidata a magistrada en materia civil del TSJ, señaló que en el medio de impugnación presentado por la promovente, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 107 fracciones IV, V y VIII de la Ley Reglamentaria, toda vez que:

- Manifiesta que la promovente carece de interés jurídico y de legitimación, pues a su dicho, no se vio afectada de forma directa con el acto reclamado, en virtud de no haber participado como candidata en el Proceso Electoral Judicial.
- Señala que los hechos impugnados por la promovente se tratan de actos consumados, toda vez que la declaración de validez es el acto en contra del cual se debió basar su reclamación, y no contra la constancia de mayoría, la cual certifica el triunfo por la mayoría de votos obtenidos y, en ese sentido, al no haber sido impugnada la declaración de validez, quedó consentida de forma irreparable.

4.4. Gloria Angélica Mendoza Beltrán. En su carácter de candidata a magistrada en materia civil del TSJ, señaló que la parte actora carece de legitimación e interés jurídico para promover el medio de impugnación, en virtud de que ésta no se vio afectada en sus derechos humanos.

4.5. Adalberto Vences Baca. En su carácter de candidato a magistrado en materia penal del TSJ, señaló que, con independencia de que se actualice otra causal de improcedencia, la promovente carece de interés jurídico para impugnar el acuerdo de asignación y entrega de la constancia de mayoría y validez en la elección de magistraturas penales del estado de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el artículo 107 fracción V de la Ley Reglamentaria.

4.6. Gerardo Javier Acosta Barrera. En su carácter de candidato a magistrado en materia penal del TSJ, manifestó que en el medio de impugnación se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 107 fracciones IV, V y VIII de la Ley Reglamentaria, en virtud de que la promovente carece de interés jurídico y legitimación, pues no se ve afectada de forma directa con la ejecución del acto reclamado, toda vez que no participó como candidata en la elección.

4.7. José Luis Chacón Rodríguez. En su carácter de candidato a magistrado en materia penal del TSJ, manifestó que en el medio de impugnación se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 107 fracciones IV, V y VIII de la Ley Reglamentaria, en virtud de que la promovente no cuenta con interés jurídico y legitimación, toda vez que la ejecución del acto reclamado no le afecta directamente, pues no participó como candidata en el marco del Proceso Electoral Judicial.

4.8. Marcela Herrera Sandoval. En su carácter de candidata a magistrada en materia familiar del TSJ, manifestó que, con independencia de que se actualice otra causal de improcedencia, la promovente carece de interés jurídico para impugnar la asignación y entrega de la constancia de mayoría y validez en la elección de magistraturas del estado de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el artículo 107 fracción V de la Ley Reglamentaria.

4.9. Perla Guadalupe Ruiz González. En su carácter de candidata a magistrada en materia penal del TSJ, expuso que la demanda es notoriamente improcedente, puesto que los argumentos de la promovente no son viables para modificar o revocar los acuerdos impugnados en su perjuicio.

4.10. Roberto Andrés Fuentes Rascón. En su carácter de candidato a magistrado en materia civil del TSJ, señaló que la promovente carece de legitimación procesal, ya que no participó como candidata en el proceso de selección para alguna magistratura civil, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 107, 108, 109, 110 y 111 de la Ley Reglamentaria.

5. ANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD⁶

Previo a verificar la procedencia de los medios de impugnación en que se actúa, este Tribunal advirtió que la actora expresó en el proemio de los mismos, ser una **persona con discapacidad psicosocial**, la cual se encuentra respaldada mediante dictamen clínico, mismo que adjunta a su escrito inicial.⁷

Por ello, este Pleno cuenta con atribuciones para cumplir con la debida diligencia en su actuación como autoridad resolutora, analizando la condición de la parte actora – *quien manifestó dicha autoadscripción* – y, en ese sentido, actuar con perspectiva de discapacidad, sin que ello implique realizar una valoración probatoria del documento aportado por la promovente, pues basta con tener a la vista los elementos mínimos que den lugar a este Tribunal a ejercer dichas atribuciones, incluso las de carácter convencional.

De acuerdo con la *Guía para la inclusión de personas con discapacidad* del TEPJF⁸, la discapacidad psicosocial surge de la interacción entre las personas con dicha condición y las barreras del entorno físico, social y actitudinal, las cuales restringen o frenan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas.

Tradicionalmente, las personas con discapacidad han sido sometidas a prácticas de marginación que las han colocado en una posición de invisibilidad, lo cual les ha impedido participar en igualdad de condiciones

⁶ La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su **Protocolo para Juzgar con perspectiva de Discapacidad**, brinda estándares sobre cuestiones jurídicas que son relevantes en asuntos que involucren a personas con discapacidad, resultando fundamental que las personas juzgadoras tengan a su alcance herramientas que contribuyan a entender el alcance de los principios y derechos de las personas con discapacidad.

⁷ Visible en foja 40 del expediente JIN-272/2025.

⁸ Carreón, M., *Guía para la inclusión de personas con discapacidad: Acceso a la justicia y derechos político-electorales*, 1ª edición, Ciudad de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2019.

dentro de la sociedad, pues se ha partido de una premisa errónea y discriminatoria de que *no deben ser tomadas en cuenta*.⁹

A partir de ello, las personas con discapacidad se ven imposibilitadas de ser partícipes en actividades sociales y, desafortunadamente, en asuntos públicos, pues las dinámicas de la vida diaria – *como lo es la educación, la interacción social y el trabajo* – se conforman tomando como base lo que es indispensable para el grupo o sector dominante, es decir, para quienes no viven con alguna discapacidad.

En ese sentido, la perspectiva de discapacidad exige a las personas juzgadoras el análisis de los casos desde un enfoque clave de derechos humanos – *tanto a la hora de interpretar el derecho, como al momento de aplicarlo*-, con el objeto de eliminar las barreras que reproduce el sistema de justicia e inhiben la participación de las personas en el acceso a esta, a fin de garantizar que se dicte el ajuste que más favorezca a la persona, atendiendo a la situación concreta y, de esta forma, hacer operativa la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

Así pues, la perspectiva de discapacidad ofrece los elementos para mostrar que la situación de desigualdad estructural en la que se encuentran las personas con cierta condición, es consecuencia de las barreras existentes en el entorno, entre otras cuestiones.

Considerar lo contrario, es decir, que la autoridad jurisdiccional sea ajena a juzgar con perspectiva de discapacidad, ocasionaría que en el desarrollo de un proceso se reproduzcan estereotipos que perjudiquen los derechos de la parte que se encuentre en desventaja procesal con motivo de una discapacidad.

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN ha hecho un amplio desarrollo sobre la perspectiva de personas con discapacidad¹⁰, señalando que tiene

⁹ Palacios, A., *El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*, p. 25.

¹⁰ Tanto en el amparo directo en revisión 2387/2018, como en el amparo directo en revisión 3788/2017.

como punto de partida el reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen derecho a una protección especial por parte del Estado, incluyendo a las autoridades jurisdiccionales dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Conforme a los precedentes ya referidos, la perspectiva de discapacidad se despliega a partir de dos supuestos fácticos:

- 1) La autoridad jurisdiccional advierte de forma oficiosa que alguna de las partes está en una posición de desventaja en el procedimiento debido a una condición de discapacidad, ya sea biológica, orgánica, fisiológica, sensorial, cognitiva, psicológica y/o de cualquier otra en la que, de forma notoria se percibe una diversidad funcional que genera una desventaja o vulnerabilidad procesal, siendo ineludible aplicar el marco regulatorio de los derechos de las personas con discapacidad y, de ser necesario, **realizar ajustes procesales para evitar la desigualdad** dentro del procedimiento.

- 2) Cuando una de las partes es quien **manifiesta tener una desventaja procesal con motivo de una discapacidad**, motivo por el cual solicita a la autoridad jurisdiccional realice las adecuaciones y ajustes necesarios al proceso, con el fin de que se garantice y respete de forma efectiva el derecho de acceso a la justicia.

En ambos supuestos, la autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a operar bajo tal perspectiva, siempre que existan elementos probatorios que permitan establecer – *incluso de manera indiciaria* – que la persona tiene una condición o diversidad funcional que pueda calificarse como una discapacidad, además de que esta se traduce en una desventaja procesal que impida su acceso a la justicia en condiciones de igualdad.¹¹

¹¹ Criterio sostenido en la Tesis Aislada 1a. CCXVII/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 310, con número de registro digital 2018630, de rubro: “**DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. OBLIGACIONES QUE TIENEN LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES CUANDO UNA PERSONA ALEGA TENER UNA DISCAPACIDAD Y SOLICITA ALGÚN AJUSTE AL PROCEDIMIENTO.**”, consultable en el portal electrónico: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018630>

En el caso concreto y como fue referido en párrafos anteriores, la parte actora en los JIN que nos ocupa, manifestó ser una **persona con discapacidad psicosocial**, adjuntando un dictamen clínico a fin de acreditar dicha condición, motivo por el cual este Tribunal no tiene impedimento alguno en realizar ajustes al procedimiento¹² para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la promovente.

La razonabilidad de tales ajustes se actualiza cuando: **a)** se logra el objetivo para el que se realiza, y **b)** está diseñado para satisfacer los requerimientos de la persona con discapacidad.¹³

No obstante, aplicar la perspectiva de discapacidad en un caso particular, no se traduce en que este Tribunal se encuentre obligado a resolver el fondo del asunto conforme a las pretensiones planteadas por la parte actora, atendiendo únicamente a su condición de discapacidad, así como tampoco que dejen de observarse los requisitos de procedencia del medio de impugnación correspondiente, ni los criterios normativos y jurisprudenciales que al caso resulten aplicables, en virtud de que las formalidades procesales posibilitan a cualquier órgano jurisdiccional arribar a una determinación adecuada.

6. PROCEDENCIA

Este Tribunal considera que, con independencia de que se actualice alguna otra causal, los JIN materia de análisis resultan **improcedentes** y, por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 fracción II de la Ley Electoral Reglamentaria, deben **desecharse**, en virtud de que la parte actora **carece de interés jurídico en su pretensión**, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 107 fracción IV de la Ley Reglamentaria.

¹² Los cuales tienen como objetivos principales, propiciar la participación de las personas con discapacidad en los procesos, con la finalidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia; además de que permiten asegurar los derechos en materia de igualdad y no discriminación en relación con el derecho de acceso a la justicia.

¹³ Observación general núm. 6 (2018) sobre la igualdad y la no discriminación, aprobada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, párrafo 25, consultable en el portal electrónico: <https://docs.un.org/es/CRPD/C/GC/6>

Lo anterior, toda vez que el artículo 91 de la Ley Reglamentaria dispone que la demanda del JIN deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que **se notifique a la parte interesada** el resultado del cómputo relacionado con la elección impugnada.

De tal manera que el interés jurídico se actualiza si se alega la transgresión de algún derecho subjetivo de la parte promovente que, a su vez, hace necesaria y útil la intervención de la autoridad jurisdiccional para reparar dicha vulneración. Una vez satisfecha tal hipótesis, sería evidente que la parte actora tendría interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de su pretensión.¹⁴

En ese sentido, de forma procesal el interés jurídico exige que quien impugne demuestre:

- 1) La existencia el derecho subjetivo político-electoral que se dice vulnerado.
- 2) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, del que deriven los agravios de su impugnación.

Esto es, el ejercicio de la acción en el JIN se encuentra reservado de forma exclusiva para ser interpuesto por quien resienta una afectación – *como lo es, aquella candidatura dentro de un proceso electoral* –, y es procedente para impugnar actos o determinaciones de las autoridades electorales que violen normas constitucionales o legales, siendo dichos actos los señalados en el artículo 89 de la Ley Reglamentaria, a saber:

- a) Los resultados consignados en las actas de cómputo, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las

¹⁴ Jurisprudencia 7/2002 de la Sala Superior, de rubro: **“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.”**, consultable en el portal electrónico: <https://www.te.gob.mx/ius2021/#/7-2002>

Constancias de Mayoría y Validez, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas.

b) Por nulidad de la elección.

c) La falta de elegibilidad de la candidatura que resulte triunfadora.

Por tanto, el interés jurídico se produce cuando el derecho cuestionado es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, ya sea porque se ostenta como titular de ese derecho o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular.

Lo anterior, toda vez que si el interés jurídico supone una afectación jurídica a quien promueve el medio de impugnación, **debe demostrarse su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en su demanda**, pues los elementos señalados anteriormente son concurrentes y, por tanto, basta la ausencia de uno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.¹⁵

En el caso concreto, se tiene que la parte actora se ostenta como una ciudadana observadora del Proceso Electoral Judicial, quien además refiere, ha brindado *“seguimiento técnico y ético a través de una iniciativa de ejercicio independiente (...) promoviendo principios de transparencia, mérito y equidad en favor de personas aspirantes con trayectoria destacada o en situación de vulnerabilidad”*.

Al respecto, la parte actora impugna la designación de personas aspirantes a magistraturas en distintas materias que, aparentemente, son inelegibles para ejercer tales cargos por incumplimiento de requisitos, conflictos de interés, nepotismo y posible tráfico de influencias que, a su dicho, afectan la independencia judicial, señalando como agravio una vulneración directa al principio de legalidad, certeza y honestidad, así

¹⁵ Criterio sostenido en la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Tomo II, marzo de 2019, página 1598, con número de registro digital 2019456, de rubro: **“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”**, consultable en el portal electrónico: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019456>

como al principio de equidad en la contienda, en el curso del Proceso Electoral Judicial.

Por su parte, la Jurisprudencia 11/2022¹⁶ señala en términos generales, que **la ciudadanía no cuenta con interés jurídico y/o legítimo para impugnar los actos correspondientes a las etapas de organización, desarrollo y cómputo de la votación de una elección**, a menos que su interés emane de una afectación real y directa de sus derechos políticos y electorales.

Recientemente y aunado al criterio señalado anteriormente, la Sala Superior se pronunció sobre la falta de interés jurídico¹⁷, considerando que cuando una persona ciudadana no participa como candidata en una elección de personas juzgadoras, carece de dicho interés para controvertir los resultados obtenidos, en atención a que **no podría alcanzarse ningún beneficio con la impugnación**.

Aunado a lo anterior y en virtud de que la parte actora carece de interés jurídico para impugnar actos y/o determinaciones concernientes a la naturaleza que persigue un medio de impugnación como lo es el JIN, **lo procedente es desechar las demandas**, sin perjuicio de que pudiera actualizarse alguna otra causal de improcedencia señalada en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria.

Por tanto, dada la improcedencia de los medios de impugnación por falta de interés jurídico de la parte actora, este Tribunal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar un pronunciamiento respecto de las medidas cautelares solicitadas por la promovente.

¹⁶ Criterio de la Sala Superior, aplicable por analogía para cualquier acto vinculado directa o indirectamente con un proceso electoral, de rubro: **“REVOCACIÓN DE MANDATO. POR REGLA GENERAL, LA CIUDADANÍA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIR LOS ACTOS CORRESPONDIENTES A LA ETAPA DE ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA.”**, consultable en el portal electrónico: <https://www.te.gob.mx/jius2021/#/11-2022>

¹⁷ SUP-JIN-44/2025, consultable en el portal electrónico: <https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/superior/SUP-JIN-0044-2025.pdf>

7. VISTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO

No pasa desapercibido que en el escrito de impugnación que dio lugar al JIN-275/2025, la parte actora señaló como petición a este Tribunal exhortar a la autoridad competente a iniciar las investigaciones administrativas y, de ser el caso, los procedimientos de sanción en contra de quienes resulten responsables de la elaboración y aprobación de la convocatoria correspondiente al Proceso Electoral Judicial, así como de la emisión de autos y acuerdos que, a su parecer, vulneraron el debido proceso y la independencia judicial.

Al respecto, el Título Cuarto de la Constitución Federal sienta las bases normativas sobre las responsabilidades de las personas servidoras públicas, señalando que se aplicarán sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, estableciendo que las faltas administrativas – *ya sean graves o no graves* –, serán investigadas y substanciadas por los órganos internos de control.¹⁸

A su vez, el Título XIII de la Constitución Local, señala que son personas servidoras públicas todas aquellas que, entre otros órganos, sean funcionarias y empleadas del Poder Legislativo, ya sea que su designación tenga origen en un proceso de elección popular, en un nombramiento o en un contrato, estableciendo que las faltas administrativas serán investigadas por los órganos internos de control.¹⁹

Por otra parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que, en el ámbito de su competencia, los órganos internos de control serán las autoridades facultadas para la aplicación de la referida Ley, que tendrán a su cargo la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas.²⁰

¹⁸ De conformidad con lo establecido por el artículo 109 de la Constitución Federal.

¹⁹ De acuerdo con lo previsto en el artículo 178 de la Constitución Local.

²⁰ Artículos 9 fracción II y 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, señala en su artículo 145 TER que el Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado cuenta con atribuciones de investigación, de substanciación y resolución, teniendo a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas del referido Congreso.

Por tanto, este Tribunal considera oportuno **dar vista** de la presente determinación **al Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado**, a fin de que, en el ámbito de su competencia, determine lo conducente, de conformidad con lo establecido por los artículos 178 de la Constitución Local, 9 fracción II y 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 145 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

Para la observancia de lo anteriormente señalado, este Tribunal insta al H. Congreso del Estado que informe a la promovente sobre las actividades que realiza el Órgano Interno de Control, a fin de que, si es su deseo, presente una denuncia y/o amplíe los hechos señalados para los efectos legales a que haya lugar.

8. VISTA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

No pasa desapercibido para este Tribunal que la promovente es una persona con discapacidad psicosocial y que si bien carece de interés jurídico para promover un Juicio de Inconformidad ante esta autoridad jurisdiccional, manifestó haber recibido múltiples ataques y hostigamientos por parte de personas candidatas dentro del Proceso Electoral Judicial en curso, así como de servidoras y servidores públicos de distintos niveles de gobierno, argumentando que dichos ataques sistemáticos han mermado considerablemente su salud emocional, agravando su condición psicosocial y dificultando su capacidad para ejercer plenamente sus derechos ciudadanos y procesales.

Por tal motivo y al tratarse de actos que podrían poner en riesgo la integridad de la promovente, se da vista de la presente determinación a la Fiscalía General del Estado, con fundamento en lo establecido por el artículo 2 de la Ley Orgánica de dicha dependencia, a efecto de que:

- I. Establezca contacto con la promovente, a fin de que, si es su deseo, le sea ofrecida atención psicológica y, de así considerarlo pertinente dentro del ámbito de sus atribuciones, ordene las medidas de protección que correspondan.
- II. De ser el caso, se canalice a la promovente hacia las dependencias o instituciones que proporcionen los servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo y demás de contenido similar, así como la vigilancia de su debida atención.
- III. Inicie la investigación de los hechos que, en su momento, sean narrados por la promovente, si es su deseo.

9. AJUSTES RAZONABLES

Toda vez que la promovente señaló en sus medios de impugnación, ser una persona con discapacidad psicosocial, este Tribunal cuenta con atribuciones para asegurar su acceso efectivo a la justicia desde una perspectiva que observe el modelo social de discapacidad, a partir de la adopción de medidas especiales que atiendan a sus necesidades, a efecto de dotarle, **en la mayor medida posible**, de elementos y condiciones de accesibilidad, a fin de garantizar la igualdad sustantiva y estructural, así como la no discriminación de la promovente.²¹

Constitucionalmente, el derecho de acceso a la justicia garantiza que las resoluciones que dicten las autoridades jurisdiccionales sean emitidas de manera pronta, completa e imparcial; así pues, las sentencias deben ser

²¹ Jurisprudencia 7/2023 de la Sala Superior, de rubro "**PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES TIENEN EL DEBER DE ADOPTAR MEDIDAS QUE GARANTICEN SU EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA DE ACUERDO CON EL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD.**", consultable en la liga electrónica: <https://www.te.gob.mx/ius2021/#/7-2023>

completas, eficaces y entendibles para quien acuda a tales autoridades en búsqueda de una resolución a su favor.

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN se ha pronunciado respecto a que la tutela judicial efectiva no se cumple únicamente con hacer del conocimiento de las personas las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, sino que es un deber implementar formatos de lectura sencilla, a fin de que pueda comprenderse lo resuelto.²²

Dicho formato, no debe ser idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad en concreto, advirtiéndose además que dicho formato de lectura fácil no sustituye la estructura acostumbrada de las sentencias, pues se trata de un complemento de la misma, siendo esto acorde con el modelo social de discapacidad.

En ese sentido, esta autoridad jurisdiccional debe asegurar el acceso a la justicia mediante un ajuste razonable, consistente en la emisión de un resumen de la presente resolución con un formato de lectura fácil y accesible.

Por lo anterior, se presenta la sentencia en formato de lectura fácil, en los siguientes términos²³:

“DATO PERSONAL PROTEGIDO, en tus escritos presentados el 18 de junio nos expusiste que diversas candidatas y candidatos no cumplían con los requisitos para ser magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pues señalaste que no cuentan con el tiempo suficiente de experiencia en la materia, se encontraban en funciones antes del cierre de la convocatoria, así como posibles hechos que podrían comprometer la independencia judicial.

²² Tesis Aisalda 1a. CCCXXXIX/2013, con número de registro digital 2005141, de rubro: **“SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO”**, consultable en la liga electrónica: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005141>

²³ De conformidad con las directrices señaladas en los artículos 2 y 21 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, consultable en la liga electrónica: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>

Te informamos que durante el tiempo que tus demandas se publicaron en los estrados del Instituto, varias candidatas y candidatos a magistraturas presentaron sus escritos como personas terceras interesadas en el juicio.

Posteriormente, se hicieron los expedientes en este Tribunal y se procedió al estudio de cada uno de ellos, para llegar a una determinación.

Luego, este Tribunal consideró oportuno que los expedientes que se formaron con tus demandas debían resolverse en una sola sentencia, pues existe relación de sujetos, objetivos y hechos que señalaste en tus escritos.

Después de realizar el estudio de tus asuntos, las magistradas y el magistrado de este Tribunal consideramos que, al no haber participado como candidata dentro del proceso electoral en curso, no cuentas con interés jurídico para reclamar esos actos, es decir, tú como ciudadana no te ves directamente afectada con la declaración de validez de la elección, y tampoco con la entrega de las constancias a favor de quienes resultaron favorecidas y favorecidos con la votación obtenida, requisito que establece la Ley para poder analizar tus demandas.

Es por ello que este Tribunal llegó a la conclusión de desechar los medios de impugnación que presentaste directamente con nosotros, pues se actualizó una causal de improcedencia señalada en la Ley Electoral que regula la elección de las personas juzgadoras en nuestro estado.

Sin embargo, como autoridad jurisdiccional reconocemos el alcance de tu labor social, pues sabemos de tu intención de participar activamente como abogada y, sobre todo como ciudadana, en beneficio del sistema de justicia en nuestro estado.

Por otra parte, resulta importante para nosotros como Tribunal que se le dé el seguimiento correspondiente a los hechos que narraste en tus demandas, por ese motivo dimos aviso al Congreso del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que, de acuerdo con sus atribuciones, procedan a dar las instrucciones necesarias para brindarte la atención que requieras, si así es tu deseo.

También te informamos que anteriormente resolvimos dos asuntos que nos presentaste y que tienen que ver con posibles infracciones en materia electoral, en los que le ordenamos al Instituto Estatal Electoral que se ponga en contacto contigo para ofrecerte los servicios de su Defensoría Pública y, si es tu deseo, presentar las quejas o denuncias correspondientes con la asesoría y defensa que te serán brindadas.

Gracias por participar activamente en el mejoramiento de nuestro sistema de justicia.”

Al respecto, este Tribunal le ordena a la Secretaría General que, al momento de notificar a la promovente la presente determinación, lo haga de manera conjunta con el formato de lectura fácil y que se haga constar en el acta de notificación que para tal efecto se emita, a efecto de garantizar que la promovente tenga conocimiento del contenido de esta sentencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal Electoral:

RESUELVE:

PRIMERO. Se **acumulan** los juicios de inconformidad de claves **JIN-275/2025, JIN-284/2025, JIN-286/2025 y JIN-294/2025**, al diverso de clave **JIN-272/2025**.

SEGUNDO. Se declara la **improcedencia** de las demandas y, en consecuencia, se **desechan**.

CUARTO. Se **instruye** a la Secretaría General de este Tribunal a efecto de que agregue copia certificada de la presente resolución a los expedientes de claves **JIN-275/2025, JIN-284/2025, JIN-286/2025 y JIN-294/2025**, y seguir el curso natural de las actuaciones subsecuentes, únicamente en el expediente principal.

QUINTO. Se vincula al **H. Congreso del Estado** y a la **Fiscalía General del Estado**, a efecto de que realicen las acciones descritas en los apartados **7 y 8** de la presente sentencia.

SEXTO. Se **solicita** a la Secretaría General realice la versión pública de la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE:

a) **Personalmente** a la parte actora, en el domicilio señalado para tal efecto, de manera conjunta con el formato de lectura fácil.

b) **Por oficio:**

- Al **Instituto Estatal Electoral de Chihuahua**, en su carácter de autoridad responsable.
- Al **H. Congreso del Estado de Chihuahua**, para que proceda conforme al **apartado 7** de la presente determinación.
- A la **Fiscalía General del Estado de Chihuahua**, para que proceda conforme al **apartado 8** de esta sentencia.

c) **Por estrados** a las demás personas interesadas.